CEDAW/C/MEX/CO/
9

Distr.: General

20 julio 2018

Original: Inglés

VERSIÓN

PRELIMINAR SIN

EDITAR

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México* ¹

1. El Comité examinó el noveno informe periódico de México (CEDAW / C / MEX / 9) en sus sesiones 1608 y 1609, celebradas el 6 de julio de 2018 (véanse CEDAW / SR / 1608 y 1609). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en CEDAW / C / MEX / Q / 9 y las respuestas de México figuran en CEDAW / C / MEX / Q / 9 / Add.1.

A. Introducción

2. El Comité aprecia la presentación por el Estado Parte de su noveno informe periódico. También agradece el informe de seguimiento del Estado Parte (CEDAW / C / MEX / CO / 9 / Add.11) y sus respuestas por escrito a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo que sesionó previo al período de sesiones, así como el informe de la presentación oral de la delegación y las aclaraciones

¹¹ * Aprobado por el Comité en su septuagésimo período de sesiones (2-20 de julio de 2018).

adicionales posteriores proporcionadas en respuesta a las preguntas planteadas oralmente por el Comité durante el diálogo. También agradece la información proporcionada electrónicamente después del diálogo.

3. El Comité elogia al Estado parte por su delegación multisectorial, que fue encabezada por el Excelentísimo Señor Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. La delegación estaba compuesta además por representantes del Ministerio del Interior; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal; la Comisión Nacional de Tribunales Supremos de Justicia; la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores; el Instituto Nacional de la Mujer; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Comisión Ejecutiva para la Atención de las Víctimas; el Consejo de la Judicatura Federal; el Ministerio de Asuntos Exteriores; el Ministerio de Defensa Nacional; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado; la Secretaría de Educación Pública; el Consejo Nacional para la Prevención y Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Oficina del Fiscal Especial para Investigar los Delitos relacionados con los Actos de Violencia contra la Mujer; la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Secretaría del Trabajo; la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas; así como representantes del Poder Judicial y el Instituto de la Mujer del Estado de Coahuila. A la delegación se unieron el Embajador ante la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Su Excelencia Socorro Flores Liera; y Embajador Alterno y Representante Permanente ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Su Excelencia Juan Raúl Heredia, junto con representantes de la Misión Permanente de México. El Comité aprecia el diálogo constructivo que tuvo lugar entre la delegación y el Comité.

B. Aspectos positivos

4. El Comité acoge con satisfacción los progresos realizados desde su examen en 2012 de los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Estado parte (CEDAW / CMEX / CO / 7-8) en la realización de reformas legislativas, en particular la adopción de lo siguiente:

a) La Ley general sobre desapariciones forzadas, en 2018;

b) La Ley de planeación nacional del desarrollo (modificada en 2018), que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación basada en el sexo;

(c) La Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura (y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes), en 2017;

d) Enmiendas a la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, incluidas las disposiciones que prohíben la misoginia, la homofobia y la discriminación racial, en 2014, y las expresiones de odio, incluidas las expresiones de sexismo, en 2017;

e) Enmiendas a la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida una disposición que penaliza el feminicidio, en 2016;

f) La Ley general sobre niños, niñas y adolescentes, que incluye disposiciones sobre la igualdad de derechos a la educación, la salud y la participación de niñas y niños en 2014;

(g) La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye nueve artículos que promueven la igualdad de género en diferentes áreas, en 2014.

5. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado Parte por mejorar su marco de política institucional y normativo para acelerar la eliminación de la discriminación contra la mujer y promover la igualdad de género, incluida la adopción o el establecimiento de:

a) El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, (PROIGUALDAD, 2018-2024);

(b) El Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2014-2018);

(c) El Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018);

(d) El Programa integral para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer (2014-2018);

(e) El Programa Nacional para el Avance y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2014-2018);

f) El Acuerdo sobre la igualdad de género y la lucha eliminar la violencia contra la mujer en los medios de comunicación (2016);

(g) La Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos en las Adolescentes (2015).

6. El Comité celebra el hecho de que, en el período transcurrido desde el examen del informe anterior, el Estado parte haya ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm. 138), 2015.

C. Objetivos de Desarrollo Sostenible

7. El Comité acoge con agrado el apoyo internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hace un llamado a la vigencia de la igualdad de género de hecho y de derecho (sustantiva), de conformidad con las disposiciones de la Convención, durante todo el proceso de implementación de la Agenda 2030. El Comité recuerda la importancia del objetivo 5 y la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Insta al Estado parte a que reconozca a las mujeres como la fuerza motriz del desarrollo sostenible de su país y adopte políticas y estrategias pertinentes a tal efecto.

D. Congreso

8. El Comité subraya el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención (véase la

declaración del Comité sobre su relación con los legisladores, anexo VI a A / 65/38). Invita al Congreso Nacional, de conformidad con su mandato, a tomar las medidas necesarias con respecto a la aplicación de las presentes observaciones finales hasta la presentación del próximo informe periódico que deberá rendir en cumplimiento de la Convención.

E. Principales áreas de preocupación y recomendaciones

Contexto general y violencia de género

9. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado Parte por superar el clima general de violencia y promover los derechos de la mujer. Sin embargo, reitera sus preocupaciones anteriores (CEDAW / CMEX / CO / 7-8, párr. 11) y lamenta que la persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el Estado parte, así como la militarización de la sociedad, esté afectando negativamente el goce de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. También le preocupa que la aparición de propaganda contra el género en el Estado parte pueda socavar los logros alcanzados en los últimos años en el fomento de la igualdad entre los géneros.

10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW / CMEX / CO / 7-8, párrafo 12) e insta al Estado Parte a que:

a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención, y elimine los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y las niñas;

b) Adopte medidas apropiadas para aumentar la sensibilización acerca de los derechos humanos de la mujer mediante campañas y la construcción de políticas públicas diseñadas e implementadas con la participación activa de las organizaciones de mujeres y enfrente la propaganda negativa en materia de género.

Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer

11. El Comité considera positivos los esfuerzos realizados para fortalecer la armonización del marco jurídico con la Convención, incluso mediante enmiendas al artículo 73 de la Constitución que permiten al Congreso emitir leyes federales y estatales y la adopción de un Programa Nacional para la Igualdad y no discriminación (2014-2018). Sin embargo, sigue preocupado acerca de:

a) La persistencia de disposiciones discriminatorias en materia de sexo en la legislación, combinadas con la falta de armonización de los códigos civiles y penales a nivel estatal, que siguen obstaculizando la aplicación efectiva de la Convención y de la legislación nacional en materia de igualdad de género;

b) La ausencia de mecanismos efectivos e insuficientes asignaciones presupuestarias estatales para implementar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que no se ha logrado eliminar la discriminación, especialmente las formas de discriminación intersectorial, particularmente contra las indígenas, Mujeres afro mexicanas y migrantes, mujeres con discapacidades y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales;

c) La falta de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra la mujer ha dado lugar a bajas tasas de procesamiento en los casos de discriminación basada en el sexo.

12. De conformidad con las obligaciones del Estado Parte en virtud del Convenio y en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, meta 5.1 poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todas partes, el Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CEDAW / C / MEX / CO / 7-8, párrafo 14.b) y recomienda que el Estado Parte:

a) **Derogue cualquier disposición de su legislación que discrimine a las mujeres y las niñas, armonice definiciones jurídicas y sanciones por discriminación y violencia contra la mujer y**

garantice la plena armonización de los códigos penales federales y estatales relacionados con los delitos contra mujeres y niñas;

(b) Adopte una ruta que incluya recursos adecuados, un cronograma y metas con objetivos medibles que requieran que las autoridades a nivel federal, estatal y local implementen las leyes pertinentes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de facto contra las mujeres, en particular las indígenas, afrodescendientes. Mujeres mexicanas, migrantes, mujeres con discapacidades y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales;

c) Adopte un Código Penal Nacional y establezca un mecanismo judicial de denuncia para ocuparse específicamente de los casos de discriminación contra la mujer y garantice la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para su aplicación efectiva, incluida la capacitación del poder judicial en la aplicación de la Convención y otras leyes contra la discriminación.

Acceso a la justicia

13. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado Parte para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, incluido el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, le preocupa que las profundamente enraizadas barreras institucionales, estructurales y prácticas cotidianas continúen obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia, incluyendo:

a) Estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de la mujer entre el poder judicial, los profesionales del derecho y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía;

(b) Los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad o desviación judicial en la resolución de casos, falta de responsabilidad de los jueces que no cumplen con el desempeño jurisdiccional sensible al género, combinado con acceso público limitado a las decisiones judiciales;

c) Las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres indígenas de bajos ingresos, rurales, y las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia;

d) Conocimiento limitado de la información sobre sus derechos en virtud de la Convención, así como de los recursos legales disponibles para las mujeres, incluidas las víctimas de violencia de género, y las bajas tasas de enjuiciamiento en esos casos.

14. De conformidad con el Convenio y su Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia (2015), el Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Asegure la construcción de la capacidad-sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes del orden a nivel federal, estatal y local, sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres y las niñas;

(b) Adopte medidas efectivas para garantizar la implementación del Protocolo de la Suprema Corte para Juzgar con Perspectiva de Género en todo el poder judicial a nivel federal y estatal; garantizar la rendición de cuentas de los jueces que discriminan a las mujeres y revisar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (2015) para garantizar la publicación de todas las decisiones judiciales;

(c) Garantice que la información sobre recursos jurídicos para las mujeres víctimas de violencia de género y todas las formas de discriminación, esté disponible para todas las mujeres, incluso en idiomas indígenas y en formatos accesibles para mujeres con discapacidad, e introduzca un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita dirigida facilitar el acceso a la justicia para las mujeres que viven en zonas rurales y remotas;

(d) Aliente a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y garantice que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la mujer son efectivamente investigados y que los perpetradores sean enjuiciados y castigados adecuadamente.

Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género

15. El Comité celebra el desarrollo de una Política Nacional de Igualdad de Género, así como los diversos mecanismos que se han creado para promover la igualdad de género, incluidas las unidades de igualdad de género. Sin embargo, le preocupa:

a) Los limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES) para promover la igualdad de género, así como para apoyar su función como principal órgano de coordinación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

(b) El hecho de que el presupuesto de género, Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13), representa solo el 0.7% del presupuesto federal;

(c) La falta de coordinación sistemática e institucionalizada, a nivel federal, estatal y municipal, entre los tres órdenes de los principales órganos de gobierno que constituyen el Sistema Nacional de Igualdad de Género;

d) La ausencia de mecanismos integrales de supervisión y evaluación del impacto, para la incorporación de la perspectiva de género, incluida la difusión limitada y el uso de datos desglosados e indicadores claramente especificados;

(e) La participación limitada de las organizaciones de mujeres en el diseño y monitoreo de políticas públicas sobre igualdad de género.

16. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Aumente los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y mejore su capacidad para promover y supervisar la aplicación de políticas de igualdad de género, fortaleciendo su función dentro del marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género, en los niveles federal y estatal;

(b) Adopte un proceso integrado de presupuestación de género y asigne recursos presupuestarios adecuados para la

implementación de los derechos de la mujer, asegure la aplicación de mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejore el sistema de seguimiento de la asignación y aplicación de recursos para las mujeres;

(c) Fortalezca los esfuerzos dirigidos a asegurar la coordinación sistemática e institucionalizada entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las oficinas estatales y municipales de la mujer;

(d) Introduzca mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para abordar los factores estructurales que causan desigualdades persistentes y refuerce el enfoque integrado para la incorporación de la perspectiva de género, sobre la base del cumplimiento de los objetivos e indicadores adecuados y la recopilación efectiva de datos;

(e) Asegure que las mujeres y otras organizaciones no gubernamentales participen en el diseño y monitoreo de la implementación de políticas de igualdad de género.

Medidas Especiales Temporales

17. El Comité acoge con satisfacción los progresos realizados por el Estado Parte para facilitar la participación de la mujer en la vida política y pública a través de la política de igualdad de género PROIGUALDAD (2013-2018). Sin embargo, le preocupa la aplicación limitada de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el alcance de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos cubiertos por la Convención.

18. El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general N° 25 (2004) del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todas las áreas de la Convención donde las mujeres están subrepresentadas o en desventaja.

Estereotipos

19. El Comité celebra las medidas legislativas y de otra índole adoptadas para abordar los estereotipos discriminatorios, incluida la firma en 2016 de un Acuerdo para la Igualdad de Género y la Lucha en contra de la Violencia contra la Mujer en los medios de comunicación, pero le sigue preocupando:

(a) Los persistentes estereotipos discriminatorios relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, así como las formas intersectoriales de discriminación y la enraizada cultura de machismo en el Estado Parte, que continua obstaculizando el avance en el progreso de la igualdad de género;

(b) La normalización de la violencia contra la mujer y las imágenes estereotipadas y sexualizadas de las mujeres en los medios de comunicación;

(c) Retratos estereotipados en los medios e imágenes negativas de mujeres indígenas, mujeres afro-mexicanas, mujeres migrantes y mujeres refugiadas y solicitantes de asilo.

20. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Adopte una estrategia integral dirigida a mujeres, hombres, niñas y niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios acerca de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y eliminar las formas intersectoriales de discriminación contra las mujeres;

(b) Elabore una estrategia educativa para los profesionales de los medios que comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos discriminatorios contra la mujer y fomente la cobertura mediática sensible al género, particularmente en las campañas electorales; introduzca medidas para promover la igualdad en representación de mujeres y hombres en los medios e implemente plenamente el Acuerdo para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres en los Medios (2016), para garantizar sanciones adecuadas y refuerce las facultades de los poderes para enfrentar los estereotipos de género discriminatorios;

(c) Introducir medidas para alentar a los medios a promover imágenes positivas de mujeres indígenas, mujeres afro mexicanas, mujeres migrantes y mujeres refugiadas y solicitantes de asilo.

Prácticas dañinas

21. El Comité observa con preocupación:

Las disposiciones limitadas que prohíben los procedimientos médicos innecesarios en niños intersexuales y el apoyo inadecuado y la falta de recursos efectivos para las personas intersexuales, que se han sometido a procedimientos quirúrgicos médicamente innecesarios.

22. A la luz de la recomendación general conjunta N° 31 del Comité y N° 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas (2014), el Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Adoptar las disposiciones necesarias que prohíban explícitamente la realización de tratamientos quirúrgicos u otros tratamientos médicos innecesarios a los niños intersex hasta que alcancen una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado; y proporcionar a las familias de niños intersexuales el asesoramiento y el apoyo adecuados.

Violencia de género contra la mujer

23. El Comité acoge con satisfacción las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte para combatir los altos niveles de violencia de género en el Estado parte. Sin embargo, sigue profundamente preocupado por:

(a) Los persistentes patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas en todo el Estado parte, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexuales, particularmente el feminicidio,

(b) El hecho de que los crímenes antes mencionados a menudo son perpetrados por actores estatales y no estatales, incluidos los grupos del crimen organizado;

(c) La armonización incompleta de la legislación estatal con la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016) para criminalizar el feminicidio;

d) La alta incidencia de desapariciones forzadas contra mujeres, que se ven directamente afectadas como desaparecidas, o como consecuencia de la desaparición de un miembro de la familia, en cuyo caso la carga a menudo recae en las mujeres, no solo para la búsqueda de la persona desaparecida e iniciar la investigación, sino también para ser la principal proveedora de la familia;

(e) Los obstáculos persistentes que continúan impidiendo la implementación efectiva del Mecanismo de Alerta de Género (MAG) a nivel federal, estatal y municipal;

(f) El uso denunciado de violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales;

(g) Los limitados datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por tipo de violencia y la relación entre el autor y la víctima;

(h) Los limitados progresos en la resolución de la comunicación N° 75/2014 sobre Pilar Argüello Trujillo (aprobada por el Comité en virtud del artículo 7 (párrafos 3 a 5) del Protocolo Facultativo) a pesar de las garantías brindadas por el Estado parte al examinar este caso.

24. El Comité recuerda su Recomendación general N° 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, actualizando la Recomendación general N° 19, y reitera su recomendación de que el Estado Parte:

(a) Adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando de origen de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer;

(b) Investigue, enjuicie y castigue adecuadamente a los perpetradores, incluidos los actores estatales y no estatales, como una cuestión prioritaria;

(c) Asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016) y uniforme los protocolos de investigación policial sobre feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones penales sobre feminicidio;

(d) Simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Amber y el Protocolo Alba, y acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado; así como que garantice que la Comisión de Atención a las Víctimas fortalezca su enfoque sensible al género;

(e) Evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género, para asegurar la implementación y coordinación armonizada y extendida a nivel federal, estatal y municipal, y asegure la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, defensores de género y derechos humanos y mujeres víctimas de violencia;

(f) Aborde la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, incluso sensibilizando al público sobre sus derechos, en cooperación con la sociedad civil;

(g) Fortalezca los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas;

(h) Acelere la resolución de la comunicación N° 75/2014, aprobada por el Comité en términos del artículo 7 (párrafos 3 a 5) del Protocolo Facultativo, como cuestión prioritaria, con miras a alentar la resolución de otros casos en el futuro.

Mujeres, paz y seguridad

25. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado Parte para alentar a las mujeres a unirse a las fuerzas armadas, en particular en puestos de alto rango. Sin embargo, le preocupa la limitada participación e inclusión de las mujeres en los procesos y estrategias destinados a abordar la situación de violencia generalizada e inseguridad en el país, incluida la delincuencia organizada.

26. Recordando el Convenio y su Recomendación General N° 30 sobre la mujer en situaciones de prevención de conflictos, conflictos y situaciones posteriores a conflictos, el Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Elabore un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres en el tratamiento de la situación de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el país;

(b) Introduzca medidas especiales temporales para alentar aún más a las mujeres a unirse a las fuerzas armadas, especialmente en los altos rangos;

(c) Adopte medidas para desarrollar la capacidad de las mujeres y las niñas, incluidos los grupos de mujeres de la sociedad civil, para participar en los esfuerzos por contrarrestar la inseguridad y la violencia contra la mujer.

Defensoras de los derechos humanos de las mujeres

27. El Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos humanos y las periodistas están sometidas a diversas y crecientes manifestaciones de violencia aparentemente cometidas por agentes del Estado en algunos casos. El Comité también está preocupado por los informes que indican que las redes sociales y los ataques digitales se utilizan como una herramienta por parte de grupos anónimos para incitar a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y las periodistas.

28. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente y con perspectiva de género el Mecanismo Federal de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas en todos los Estados, para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, y que tome medidas efectivas para combatir la impunidad.

Tráfico y explotación de la prostitución

29. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos para combatir la trata en el Estado parte, incluso mediante la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Eliminar Crímenes en el ámbito de la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos (2012) Sin embargo, le preocupa:

(a) La falta de mecanismos armonizados y coordinados a nivel estatal y municipal para garantizar la aplicación efectiva de la Ley General para prevenir, sancionar y eliminar crímenes en el ámbito de la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas;

(b) La falta de una estrategia integral contra la trata y el uso limitado de datos desglosados sobre las víctimas de la trata o información sobre el alcance de la trata en el Estado parte, en particular con respecto a la trata con fines distintos de la explotación sexual;

(c) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena en casos de trata y la revictimización de mujeres y niñas, algunas de las cuales, según los informes, están penalizadas en lugar de recibir el apoyo de las víctimas;

(d) La insuficiencia de medidas de rehabilitación y reintegración de víctimas, incluido el número inadecuado de albergues y el acceso limitado a asesoramiento, tratamiento médico, apoyo psicológico y reparación, como la indemnización a las víctimas de la trata, en particular a las mujeres migrantes;

(e) La complicidad denunciada entre los agentes del Estado y las bandas internacionales de delincuencia organizada y la consiguiente

corrupción e impunidad, así como la coordinación insuficiente con los países vecinos en relación con la prevención de la trata, la atención a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.

30. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Asignar recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para la implementación efectiva y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en todos los estados federales;

(b) Fortalezca los mecanismos y políticas vigentes para combatir el tráfico y asegure que cuenten con los recursos técnicos, financieros y humanos adecuados, incluso para la capacitación de inspectores del trabajo, policías y funcionarios fronterizos, a fin de identificar mejor el trabajo forzoso, el tráfico y los delitos en contra de mujeres y niñas, y recopilar y analizar sistemáticamente datos desglosados sobre la trata de personas;

(c) Investigue, enjuicie y castigue adecuadamente a los autores de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas; y elabore directrices nacionales para la identificación temprana y la remisión de víctimas de la trata a servicios sociales apropiados a fin de evitar la revictimización;

(d) Fortalezca el apoyo a las mujeres víctimas de la trata, en particular mujeres migrantes y mujeres indígenas, garantizando un acceso adecuado a la atención de la salud, servicios de asesoramiento y compensación, incluida la reparación y la indemnización, y la provisión de refugios adecuados;

(e) Mejore la cooperación regional con los países de origen y de destino con el propósito de prevenir la trata mediante el intercambio de información y la armonización de procedimientos; fortalecer los mecanismos institucionales, especialmente a nivel local, con miras a combatir la corrupción; y sistemática y debidamente investigar incidentes de complicidad entre los agentes del Estado y las bandas del crimen organizado, y

garantizar que los perpetradores sean enjuiciados y castigados efectivamente con penas adecuadas y medidas disciplinarias, y que las víctimas reciban reparación o compensación.

31. El Comité observa con preocupación las denuncias de actos de violencia policial, extorsiones, detenciones arbitrarias y detenciones sin orden judicial de mujeres que ejercen la prostitución. También le preocupa la información limitada sobre su situación y la falta de servicios y programas específicos para las mujeres que ejercen la prostitución, incluidos los programas de salida para las mujeres que desean abandonar la prostitución.

32. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución, de la explotación y el abuso, así como que realice un estudio sobre las causas y el alcance de la prostitución y utilice los resultados del estudio para desarrollar servicios y programas de apoyo para las mujeres en la prostitución, incluidos los programas de salida para las mujeres que desean abandonar la prostitución.

Participación en la vida política y pública

33. El Comité acoge con satisfacción los progresos realizados por el Estado Parte para aumentar la participación de la mujer en la vida política y pública, en particular mediante el establecimiento del Observatorio de la participación política de la mujer y el aumento del número de candidatas elegidas en las elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:

(a) Las barreras estructurales al acceso de la mujer a la vida política y pública, en particular en el acceso a la toma de decisiones tanto en los puestos designados, como en los partidos políticos;

(b) La discriminación racial y de género dentro de los partidos políticos que continúa impidiendo que las mujeres se postulen para las elecciones a nivel estatal o municipal;

(c) Los fenómenos de aumento de la violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique la

violencia política como crimen, así como los bajos niveles de enjuiciamiento, que pueden disuadir a las mujeres de participar en elecciones a nivel federal, estatal y especialmente a nivel municipal.

34. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que utilice plenamente la Recomendación general núm. 23 (1997) sobre la mujer en la vida política y pública, incluida la elaboración de directrices para la aplicación de las disposiciones de cuotas mínimas para la representación política de la mujer, con miras a acelerar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública y política, especialmente a nivel local. Hace un llamamiento al Estado Parte para que:

(a) Establezca objetivos y calendarios concretos para acelerar la participación equitativa de las mujeres en la vida pública y política a todos los niveles y crear las condiciones necesarias para el alcance de estos objetivos;

(b) Adopte medidas para abordar las prácticas discriminatorias de jure y de facto dentro de los partidos políticos, que desaniman a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y afro-mexicanas, a postularse para las elecciones a nivel federal, estatal o municipal;

(c) En línea con la Recomendación General 35 sobre violencia de género contra la mujer, actualizando la recomendación general 19, tome medidas para armonizar la legislación estatal para reconocer la violencia política contra la mujer como un crimen, estableciendo responsabilidades claras para las autoridades federales, estatales y municipales en términos de su prevención, atención, enjuiciamiento y sanción.

Nacionalidad

35. Aunque acoge con satisfacción la reforma constitucional de 2014 que reconoce el derecho al registro de nacimientos y la reciente simplificación del proceso que exige que los niños nacidos en los Estados Unidos estén registrados en el consulado mexicano, le preocupa que el número de indígenas, niñas y niños afro-mexicanos y

migrantes que viven en áreas remotas que son registrados al momento de su nacimiento siguen siendo bajos.

36. El Comité recomienda que el Estado Parte garantice el registro universal de los nacimientos, incluso velando por que haya oficinas de registro o unidades móviles en todas las maternidades, en los principales puntos de tránsito o de destino de los migrantes y en las comunidades donde nacen niños. Adoptar una estrategia para crear conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres que aborde la propaganda negativa y las campañas a través de programas de creación de capacidad pública y garantizar la participación activa de las organizaciones de mujeres en dichos procesos. Fortalecer el proceso para acelerar el registro de niños nacidos de padres mexicanos en los Estados Unidos de América, que han regresado al Estado Parte.

Educación

37. El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos del Estado Parte por aumentar la matriculación de mujeres y niñas en esferas no tradicionales de estudios como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) y la formación profesional. Sin embargo, observa con preocupación:

(a) La persistencia de barreras estructurales para el acceso de mujeres y niñas a una educación de alta calidad, en particular en los niveles secundario y terciario, debido a asignaciones presupuestarias limitadas en algunos estados, infraestructura escolar deficiente, materiales de enseñanza y la falta de docentes calificados, especialmente en comunidades indígenas y en áreas rurales;

(b) Los recursos humanos y financieros inadecuados asignados para la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en las Niñas Adolescentes en todos los estados federales, pueden evitar que las mujeres embarazadas y las madres jóvenes se reincorporen a la educación;

(c) La persistente subrepresentación de mujeres y niñas en ámbitos de estudio tradicionalmente dominados por los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM);

(d) La inadecuada e inconsistente aplicación en los planes de estudios sobre derechos de salud sexual y reproductiva en todos los estados;

(e) La falta de mecanismos efectivos para prevenir, sancionar o erradicar el abuso y el acoso sexuales y otras formas de violencia en las escuelas.

38. El Comité recuerda el artículo 10 de la Convención, su recomendación general N° 36 (2017) sobre el derecho a la educación de las mujeres y las niñas y recomienda que el Estado Parte:

(a) Incrementar las asignaciones presupuestarias para garantizar la plena implementación del nuevo modelo de educación (2017) en todos los estados, y permitir la mejora de la escuela infraestructuras, especialmente en comunidades indígenas y en áreas rurales, y para mejorar el suministro de materiales esenciales y accesibles de enseñanza y aprendizaje;

(b) Asegurar que haya suficiente apoyo humano y financiero para la implementación completa de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo entre Niñas y Adolescentes, y fortalecer los mecanismos de apoyo para alentar a las mujeres embarazadas y madres jóvenes a continuar su educación durante y después del embarazo, incluso proporcionando instalaciones económicamente accesibles de cuidado de infantes, informando a las mujeres embarazadas de sus derechos e imponiendo multas a las instituciones educativas que expulsen a las mujeres embarazadas y / o nieguen a las madres jóvenes la reintegración en la educación;

(c) Abordar los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que pueden disuadir a las niñas de progresar más allá de la educación secundaria y mejorar las iniciativas que fomentan la matriculación de niñas en campos de estudio tradicionalmente masculinos, tales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);

d) Asegure una educación sexual apropiada para la edad, basada en la evidencia, integral y científicamente precisa para niñas y niños;

(e) Implemente medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en las instituciones educativas públicas.

Empleo

39. El Comité considera positivos los esfuerzos en curso para promover la integración de la mujer en el mercado laboral, incluso mediante enmiendas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, observa con preocupación:

(a) La baja participación económica de la mujer en el Estado parte (44% en comparación con el 78% de los hombres);

(b) La persistente brecha salarial de género (5.8% en 2017) tanto en el sector público como en el privado;

(c) La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado entre hombres y mujeres y los períodos breves de licencia de paternidad, que obligan a muchas mujeres a trabajos de tiempo parcial de baja remuneración en el sector informal;

(d) La situación precaria de las trabajadoras domésticas que, en promedio, ganan menos de la mitad del salario mínimo; no pueden acceder a la seguridad social o beneficios de salud; y no están cubiertos por la protección legal bajo el Código Laboral Federal;

(e) El acceso limitado de mujeres migrantes, mujeres indígenas, afro-mexicanas y mujeres con discapacidad al mercado laboral formal.

40. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW / C / MEX / CO / 7 8, párrafo 29) y recomienda que el Estado Parte:

a) Adopte medidas para aumentar el acceso de la mujer al mercado laboral formal y promueva el empleo de la mujer en sectores no tradicionales y mejor remunerados, así como la creación de oportunidades de empleo para grupos desfavorecidos de mujeres,

mediante el uso de medidas especiales temporales en consonancia con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y su Recomendación General N° 25 (2004);

(b) Refuerce el principio de igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con la Convención núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fortalezca los esfuerzos para eliminar la brecha salarial de género y adopte nuevas medidas para reducir y cerrar la brecha salarial de género, incluso a través de métodos analíticos y de evaluación de puestos de trabajo y encuestas salariales regulares;

(c) Vigile y haga cumplir la legislación que promueve y protege la maternidad y fortalezca los incentivos para que los hombres hagan uso de su derecho a la licencia parental, y agilizar la adopción de la política de asistencia nacional, proporcionando instalaciones suficientes y adecuadas para el cuidado de los niños;

(d) Enmendar el Código Federal de Trabajo para asegurar su aplicación a los trabajadores domésticos, realizar inspecciones laborales regulares de los hogares privados y ratificar la Convención núm. 189 (2011) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos como una cuestión prioritaria.

Salud

41. El Comité reitera sus preocupaciones anteriores (CEDAW / C / MEX / CO / 7 8, párrafo 30) y toma nota de los esfuerzos del Estado Parte por fortalecer y armonizar la Ley general de víctimas a nivel federal y estatal en relación con el aborto en los casos violación, así como la introducción de una Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes. Sin embargo, le preocupan:

(a) Las disposiciones en la legislación penal a nivel estatal que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y las niñas a recurrir al aborto inseguro con el riesgo de su salud y su vida;

(b) Inconsistencias entre los diferentes códigos penales estatales que dificultan la implementación efectiva del Artículo 35 de la Ley General de Víctimas y la Norma NOM-046-SSA2-2005, que legaliza el aborto en caso de violación;

(c) Enmiendas recientes al Artículo 10 de la Ley General de Salud (2018), que prevén objeciones de conciencia por parte del personal de salud y pueden constituir barreras para el acceso de las mujeres al aborto seguro y la anticoncepción de emergencia, especialmente en áreas rurales y remotas;

(d) Incidentes denunciados de violencia obstétrica por parte del personal de salud durante el parto;

(e) Las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de las comunidades indígenas;

(f) Informes de esterilización forzada de mujeres y niñas, y acceso limitado a servicios de salud reproductiva, en particular para mujeres y niñas con discapacidades mentales y de otra índole.

42. De conformidad con su recomendación general N° 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Intensifique los esfuerzos para acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto, con miras a garantizar el acceso al aborto legal y el acceso a los servicios de atención postaborto, independientemente de si el aborto ha sido legalizado;

(b) Armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley general sobre las víctimas y la Norma NOM-046-SSA2-2005, e informe y capacite adecuadamente al personal médico a fin de garantizar la atención especializada de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, incluida la prestación de servicios de salud. servicios esenciales de emergencia para anticoncepción y aborto;

(c) Desarrollar los protocolos necesarios para la implementación de las enmiendas a la Ley General de Salud, que permitan la

objeción de conciencia, siempre que no ponga en riesgo la vida de la madre y no impida el acceso de mujeres y niñas a aborto legal; y garantizar que en tales casos las mujeres y las niñas sean derivadas a otro prestador del servicio apropiado;

(d) Armonizar las leyes federales y estatales para definir la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género de acuerdo con la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral a todas las mujeres víctimas de violencia obstétrica;

(e) Reducir la incidencia de la mortalidad materna, incluso mediante la colaboración con parteras tradicionales y la capacitación de profesionales de la salud, especialmente en las zonas rurales, garantizando que todos los partos sean atendidos por personal de salud calificado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles;

(f) Asegurar que el personal médico solicite sistemáticamente el consentimiento plenamente informado antes de que se realicen las esterilizaciones, que los profesionales que realizan esterilizaciones sin dicho consentimiento sean castigados adecuadamente y que haya indemnización y compensación financiera para las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas.

Empoderamiento económico y beneficios sociales

43. El Comité acoge con satisfacción los constantes esfuerzos del Estado Parte por reducir la pobreza. Sin embargo, sigue preocupado por:

(a) Los altos niveles de pobreza y desigualdad que enfrentan los grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas, especialmente las mujeres indígenas y afro-mexicanas, y las mujeres cabeza de familia;

(b) Que el sistema de beneficios sociales no protege adecuadamente a las mujeres debido a su participación en el trabajo de cuidado no

remunerado y el hecho de que muchas han sido empleadas en el sector informal;

(c) acceso limitado de las mujeres a microcréditos y préstamos;

(d) La baja participación de las mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito de la gestión y la reducción del riesgo de desastres, en particular a nivel local, a pesar de la inclusión de una perspectiva de género en su Política Nacional de Cambio Climático (2012).

44. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Refuerce su estrategia nacional de reducción de la pobreza centrándose en los grupos de mujeres más desfavorecidas y marginadas, en particular las mujeres indígenas, afro-mexicanas y rurales, garantizando que el desarrollo y la aplicación de los ODS (Programa 2030) sean plenamente incluyentes y aliente la participación activa de las mujeres en la formulación y aplicación de estrategias de reducción de la pobreza;

(b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social y desarrolle programas coordinados de protección social y compensación para las mujeres;

(c) Asigne recursos financieros adicionales para aumentar el acceso a microcréditos, préstamos y otras formas de crédito financiero para mujeres con el fin de promover el espíritu empresarial de las mujeres y empoderarlas económicamente, en particular con respecto a las mujeres indígenas y afro mexicanas, y las mujeres con discapacidad;

(d) De conformidad con la Recomendación General 37 del Comité sobre las dimensiones de género relativas a la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, acelerar la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y recuperación relacionados con los desastres en todos los niveles, en particular a nivel local; y continuar los esfuerzos destinados a integrar una perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo sostenible, así como en la reducción del riesgo de desastres y la gestión posterior a los desastres.

Mujeres rurales y mujeres indígenas

45. El Comité celebra la introducción del sistema de transferencia condicionada de efectivo PROSPERA y Cruzada contra el Hambre, así como el Programa nacional de financiamiento para microempresarias y mujeres rurales. Sin embargo, le preocupa que las mujeres rurales, en particular las que viven en comunidades aisladas, incluidas las mujeres indígenas y afro-mexicanas, sigan enfrentando formas de discriminación interculturales. El Comité está particularmente preocupado porque ellas:

(a) Se ven afectadas desproporcionadamente por la pobreza y enfrentan barreras para acceder a la atención médica, la educación y las oportunidades de empleo en el sector formal;

(b) A pesar de las recientes mejoras en el acceso a la tierra, las mujeres rurales e indígenas siguen teniendo un acceso limitado a los títulos de propiedad de la tierra, así como a una representación adecuada en puestos de toma de decisiones en relación con el acceso a ejidos y tierras comunales;

(c) La aplicación limitada del principio de consentimiento libre, previo e informado y la falta de consultas a mujeres indígenas y mujeres afro mexicanas en relación con proyectos de desarrollo que afectan sus derechos colectivos a la propiedad de la tierra, así como las consecuencias de los desalojos forzosos de mujeres indígenas y afro-mexicanas de tierras tradicionalmente ocupadas o utilizadas por ellas y el despojo de tales tierras como resultado de proyectos de desarrollo rural, sin la provisión de medios de vida alternativos;

(d) El insuficiente apoyo institucional para garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a la atención de la salud, la educación y las oportunidades de empleo, y para garantizar que puedan conservar y transmitir su modo de vida tradicional.

46. De conformidad con la Convención y su recomendación general N° 34 (2016) sobre los derechos de la mujer de las zonas rurales, el Comité recomienda que el Estado Parte:

- (a) Incremente los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y la atención de salud para mujeres rurales e indígenas, y tome medidas específicas para crear oportunidades iguales, en la práctica, para las mujeres indígenas, afro-mexicanas y rurales en el mercado laboral;**
- (b) Amplíe el acceso de las mujeres indígenas y rurales a la propiedad y la tenencia de la tierra, incluso garantizando su representación adecuada en puestos de toma de decisiones en relación con el acceso a los ejidos y las tierras comunales;**
- (c) Establezca un marco legal para regular y asegurar que los proyectos de desarrollo, agroindustriales y otros negocios se implementen solo con el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas, afro-mexicanas y rurales afectadas y la provisión de medios de vida alternativos, así como acuerdos de distribución de beneficios relativos al uso de sus recursos naturales y tierras de conformidad con la Convención sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169) de la OIT;**
- (d) Fortalezca el apoyo institucional para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a los servicios básicos y las oportunidades de empleo, y mejore el reconocimiento y la preservación de sus prácticas culturales tradicionales.**

Grupos desfavorecidos de mujeres

Refugiadas, solicitantes de asilo y mujeres migrantes

47. El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de la Unidad de Investigación de Delitos contra los Migrantes, así como su campaña "Migrar no es un delito" (la migración no es un delito). Sin embargo, observa con preocupación que las mujeres migrantes continúan enfrentando la detención automática basada en la Ley de Inmigración, que el "programa de liberación de detención" no está generalizado y que muchas mujeres y niñas solicitantes de asilo no tienen acceso efectivo a los procedimientos de asilo. También le preocupa que el derecho de

los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo a trabajar, acceder a los servicios de salud y la vivienda no esté garantizado en todos los estados. También le preocupan las repercusiones de la desaparición forzada en los migrantes y los altos niveles de violencia de género, en particular en la frontera con los Estados Unidos de América.

48. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Revise la Ley de Inmigración con miras a abolir la detención automática y, mientras tanto, difunda el "programa de puesta en libertad" a todos los Estados;

(b) Asegure el acceso efectivo a procedimientos para la determinación de la condición de refugiado que sean justos, eficientes y sensibles al género;

(c) Asegure que todos los Estados apliquen el derecho de las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a trabajar, acceder a los servicios de salud y la vivienda;

(d) Garantice que todos los servicios necesarios en materia de empleo, atención médica, asesoramiento psicológico, educación y su participación en los asuntos públicos estén a disposición de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo;

(e) Asegure que todos los casos de desapariciones forzadas de mujeres migrantes se investiguen efectivamente y los autores sean enjuiciados y castigados en función de la gravedad del delito cometido.

Mujeres detenidas

49. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas para reducir la detención preventiva y aplicar medidas no privativas de la libertad, pero sigue preocupado por las condiciones en muchos centros de detención, en particular los situados en zonas remotas, que limitan el acceso de las mujeres a servicios de salud, incluidos atención obstétrica y ginecológica, así como servicios de justicia, oportunidades de rehabilitación y reintegración, y contacto con miembros de la familia.

50. El Comité recomienda que el Estado parte siga fortaleciendo la reforma del sistema penitenciario y armonice el uso de las sanciones y medidas no privativas de la libertad en todos los Estados. El Comité recomienda además que el Estado parte mejore las condiciones carcelarias, en particular para garantizar que los servicios de atención médica adecuados, incluida la atención obstétrica y ginecológica, sean accesibles en los servicios de justicia, de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres presas y no tuteladas. Medidas para Mujeres Delincuentes ('las Reglas de Bangkok').

Matrimonio y relaciones familiares

51. El Comité toma nota de las enmiendas positivas al artículo 45 de la Ley general de los derechos del niño y del adolescente que aumentan la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años tanto para las niñas como para los niños. Sin embargo, le preocupa la implementación efectiva de esta disposición a nivel estatal. También le preocupan los informes sobre casos de matrimonio forzado, particularmente en comunidades indígenas.

52. De conformidad con la recomendación general conjunta núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer / Observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas (2014), el Comité recomienda que el Estado parte garantice la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley general de los derechos del niño y del adolescente garantizando que la edad mínima para contraer matrimonio de 18 años para niñas y niños se refleje en las leyes de todos los Estados y se aplique efectivamente en todo el Estado parte. Recomienda además que el Estado parte lleve a cabo campañas amplias de sensibilización para enfrentar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz e introduzca mecanismos para registrar todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales, remotas e indígenas.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

53. El Comité exhorta al Estado parte a que utilice la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la Convención.

Diseminación

54. El Comité pide al Estado Parte que garantice la difusión oportuna de las presentes observaciones finales, en el idioma oficial del Estado parte, a las instituciones estatales pertinentes en todos los niveles, en particular el Congreso Nacional, los ministerios estatales y los Tribunales, para su implementación total.

Seguimiento de las observaciones finales

55. El Comité requiere al Estado Parte que, en un plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 24 c), d), e) y h) supra.

Preparación del próximo informe

56. El Comité invita al Estado Parte a que presente su décimo informe periódico en julio de 2022. El informe debe presentarse a tiempo y abarcar todo el período hasta el momento de su presentación.

57. El Comité requiere al Estado Parte para que siga las directrices armonizadas sobre presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas las directrices sobre un documento básico común y documentos específicos de tratados (HRI / GEN / 2 / Rev.6, capítulo I).